

PROYECTOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y PRODUCTIVA: EXPERIENCIAS RECIENTES DE GOBIERNOS PROGRESISTAS EN AMÉRICA LATINA

Matías Kulfas*

16 de noviembre de 2023

Resumen

Este artículo analiza los enfoques y rasgos centrales de política económica y productiva de seis gobiernos progresistas en América Latina: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México. El análisis atraviesa seis grandes ejes: la gestión macroeconómica, el posicionamiento en el escenario internacional, la articulación entre Estado y mercado, la gestión de los recursos naturales, la ampliación de la matriz productiva y las nuevas agendas de ambiente, género e igualdad. El estudio muestra que, si bien existen algunos puntos en común, también es posible hallar divergencias importantes, dificultades técnicas y políticas para avanzar en las agendas de reformas y logros parciales en las agendas productivas. De manera llamativa, las fuerzas que se autoperceben progresistas han tenido dificultades para estructurar un abordaje neodesarrollista, acorde con los desafíos del siglo XXI, con una prudente distancia tanto de los enfoques neoliberales como de los sesgos estatistas, persistiendo formas híbridas con resultados ambiguos y limitaciones.

1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de “progresismo económico”?

Definiciones conceptuales y metodológicas

En los últimos años, diversas fuerzas políticas que se ubican dentro del espectro progresista en América Latina obtuvieron triunfos electorales que les permitieron volver al poder o bien acceder por primera vez a la conducción política de sus

países¹. Este artículo analizará algunos rasgos identitarios y acciones en materia de gestión de las políticas económicas y productivas a partir de seis casos nacionales: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México².

* Profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín. Ex-ministro de Desarrollo Productivo de Argentina entre 2019 y 2022. El autor agradece a quienes aportaron información y opiniones muy relevantes para este artículo, particularmente a José Miguel Ahumada, Mariano Laplane, Fernando Molina, Juan Carlos Moreno Brid, José Antonio Ocampo y Pablo Stefanoni, eximiéndolos de responsabilidad sobre posibles errores u omisiones que pudiera contener.

¹ En opinión de quien suscribe este artículo, los resultados electorales señalados no constituyen una nueva “marea rosa”, entendida como un auge de gobiernos progresistas o de izquierda, sino un fenómeno diferente, sintéticamente caracterizado por la preeminencia del malestar social (también visible en otras latitudes) que ha llevado a la alternancia: allí donde existían gobiernos ubicados más a la derecha del espectro político se abrieron opciones para experiencias más a la izquierda y viceversa.

² Por razones de espacio, el análisis no será exhaustivo, sino que procura aportar algunos de los rasgos más relevantes.



Realizar un ejercicio de este tipo está expuesto a desafíos conceptuales y metodológicos sobre los que explicitaré algunas definiciones. En primer lugar, es válido preguntarse a qué llamar “progresismo” y sobre la base de qué criterios o definiciones clasificar a determinadas fuerzas políticas dentro de ese espacio. La respuesta elegida es bastante sencilla: optamos por basarnos en la autopercepción y luego dejar que las políticas y las acciones hablen por sí mismas. En otras palabras, aquellas fuerzas que se consideren dentro del espectro progresista, que pongan el foco en la justicia social y la equidad distributiva, y cuestionen al neoliberalismo en tanto proyecto centrado en el mercado con un Estado prescindente, ingresan en el análisis y, en todo caso, serán las conclusiones que se deriven de las indagaciones las que aporten los elementos para caracterizar los mayores grados de concordancia entre discurso y praxis.

Las categorías analíticas

A los fines de este trabajo, se han definido seis ejes centrales para caracterizar los abordajes sobre políticas económicas y productivas, recurriendo a un conjunto de preguntas ordenadoras.

- La gestión macroeconómica. Los enfoques heterodoxos de los cuales suelen nutrirse algunos espacios progresistas postulan la necesidad de introducir reformas fiscales que posibiliten una mayor progresividad tributaria con el propósito de financiar políticas redistributivas, sean estas de tipo social o productivas (por ejemplo, favoreciendo a sectores industriales, a las empresas de menor tamaño o a cooperativas). Otros tipos de reformas

basados en estos enfoques pueden estar dirigidas al sistema previsional, estimulando la inclusión de personas mayores, o mejoras en las jubilaciones mínimas, o bien a reformas financieras que faciliten un mayor direccionamiento del crédito productivo para ampliar y diversificar la matriz productiva y estimular la inclusión financiera de los segmentos que padecen barreras de acceso o costos muy elevados³. La pregunta central es: ¿en qué medida se abren espacio las reformas tributarias, financieras, previsionales y otras que tornen viables procesos redistributivos o de fomento a la movilidad social y la inclusión en un sentido amplio, tanto dentro del mundo del trabajo como del capital?

- Los cambios productivos en el escenario internacional. El segundo eje analítico es la manera en que los diferentes gobiernos están procesando los nuevos desafíos productivos asociados a los cambios geopolíticos y tecnológicos que se han desplegado en los últimos años. En este sentido, las fuerzas progresistas tienden a buscar caminos que escapen a la primarización de la economía y buscar mayor autonomía tecnológica, agregación de valor e industrialización, existiendo tensiones en torno a los alineamientos respecto de diferentes bloques y grandes potencias.

- La articulación entre Estado y mercado. El ascenso del neoliberalismo ha propugnado la idea casi religiosa de que el mercado resolverá los diferentes dilemas eco-

³ Para analizar ejemplos de este tipo de abordaje macroeconómico heterodoxo, en conjunción con políticas de desarrollo productivo y cambio estructural, véase Ocampo (2011) o CEPAL (2014).

nómicos y el Estado debe relegar objetivos estratégicos en materia económica y distributiva, supeditándolos a la dinámica del mercado. Cuestionar al neoliberalismo y proponer alternativas implica poner en crisis esa idea sin caer en el extremo de negar al mercado como una manera eficiente de organización de la producción y el comercio, entendiendo que el Estado tiene un papel crucial para mejorar esa dinámica, ampliar la estructura productiva estimulando un alza persistente en la productividad y actividades asociadas al conocimiento y el cambio tecnológico, y corregir las distorsiones y “fallas sociales” que generan ciertas dinámicas de mercado. Esta consideración abarca al sistema productivo, así como también a la provisión de servicios esenciales, como la salud, la educación y el sistema previsional. Las preguntas centrales son: ¿cómo estructuran la relación Estado-mercado y en qué medida se cuestiona seriamente al neoliberalismo y se propone una síntesis superadora? ¿Cómo se coordina una relación constructiva con el empresariado que contribuya al fortalecimiento de la inversión productiva y la expansión del empleo de calidad? ¿Cómo se aborda el mundo del trabajo con una perspectiva moderna e inclusiva?

- La gestión de los recursos naturales. Se trata de un tema históricamente crucial para América Latina. La bibliografía sobre el desarrollo ha puesto el foco en cuestiones como la maldición de los recursos naturales (Sachs y Warner, 2001) o la enfermedad holandesa (Corden, 1984), mostrando que el desarrollo de las actividades basadas en recursos naturales presenta desafíos relevantes en materia de política macroeconómica, sectorial y tec-

nológica para que redunden en aportes positivos para el crecimiento, el empleo y la distribución. La bibliografía es contundente respecto de que un adecuado abordaje de la gestión de los recursos naturales es intensivo en políticas públicas (Red Sur, 2014; Ramírez Cendrero y Wirth, 2013). La pregunta por abordar es: ¿qué esfuerzos macroeconómicos y de política productiva se realizan para abordar la compleja cuestión de la gestión macroeconómica y productiva de los recursos naturales?

- La ampliación de la matriz productiva. En este punto, se juega la batalla más importante de la lucha contra la pobreza y la desigualdad: la evidencia es contundente en que el aumento de la productividad, el estímulo a nuevas actividades que incorporen tecnología y conocimiento, y la modernización tecnológica de sectores tradicionales son centrales para mejorar la estructura del empleo y generar mayores ingresos en la población. En esto es central articular la estructura tradicional con los nuevos desafíos del siglo XXI como la industria 4.0, la digitalización y la economía del conocimiento. Ello implica también desafíos institucionales como la conformación y/o la expansión de la banca de desarrollo o esquemas alternativos y agencias de innovación y política industrial. Las preguntas para problematizar son: a) ¿con qué seriedad se aborda el desafío de ampliar y modernizar la matriz productiva?; b) ¿cómo se articula lo viejo con lo nuevo, como se incorpora la agenda tecnológica siglo XXI, 4.0/economía del conocimiento?

- Las nuevas agendas económicas: ambiente, género e igualdad. Las fuerzas

progresistas han incorporado estos temas en su discurso y es importante ver cómo se traduce este abordaje en términos de iniciativas públicas. En relación con la cuestión ambiental, se trata de administrar la tensión entre un sistema productivo que venía de décadas de dinámicas productivas desprovista de mayor atención a sus consecuencias ambientales y, por otra parte, las ansiedades por acelerar una agenda ambiental que lleva, en ocasiones, a propuestas prohibicionistas sobre ciertas actividades, como la minería, las energías convencionales o ciertas modalidades de producción agropecuaria y pesquera. En materia de género e igualdad, las nuevas agendas productivas incluyen una distribución más equitativa de las tareas de cuidado y la generación de infraestructuras que faciliten una mayor presencia femenina en el mercado de trabajo, la reducción de las brechas salariales por motivos de género y el acceso de las mujeres a espacios de decisión en el mundo productivo, incorporando la lucha contra la violencia de género en el ámbito laboral.

2. Los casos seleccionados

- Argentina. Alberto Fernández inició su gobierno en diciembre de 2019 tras el período presidencial de Mauricio Macri (2015-2019), de orientación económica neoliberal. El peronismo volvió al poder reconstruyendo la unidad de sectores que se habían disgregado a lo largo del ciclo de gobiernos kirchneristas (2003-2015), pero se vio atravesado por importantes conflictos internos entre el presidente y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
- Brasil. Tras el triunfo de Jair Bolsonaro a fines de 2018 y la reversión de su encarcelamiento, Luiz Inácio Lula da Silva pudo reorganizar su fuerza política incorporando nuevas vertientes a la coalición electoral que finalmente se impuso en las elecciones de 2022. La asunción de Lula a comienzos de 2023 no estuvo exenta de dificultades, que incluyeron los graves acontecimientos protagonizados por militantes bolsonaristas que ocuparon edificios públicos. Este tercer gobierno de Lula lleva pocos meses, de modo que el análisis se focalizará en los lineamientos iniciales, desafíos y primeras medidas.
- Bolivia. Tras el golpe de Estado de 2019 y el exilio de Evo Morales, el gobierno de facto de Áñez convocó a nuevas elecciones en las que se volvió a imponer el MAS, ya no con la candidatura de Morales, sino de su principal referente económico, sindicado como artífice del éxito económico. Luis Arce Catacora preside Bolivia desde noviembre de 2020 y le tocó administrar la crisis de la COVID-19 y los efectos de la guerra de Ucrania, a lo cual se sumó una complicada situación interna debido al distanciamiento con el expresidente.
- Chile. Gabriel Boric inició su gobierno en marzo de 2022. Su ascenso está signado por el fin de la fase ascendente del denominado “modelo chileno”, tras años de expansión económica sin una reducción significativa de la desigualdad, cuya expresión fue la elevada conflictividad social registrada en 2019. Su partido expresa una coalición de partidos de izquierda y otras fuerzas progresistas, no exenta de contradicciones.

- Colombia. Gustavo Petro inició su gobierno en agosto de 2022 con un esquema de coalición de diferentes fuerzas políticas del centro a la izquierda, que se vio expresado en la conformación del gabinete de ministros. El gobierno expresó tensiones entre posiciones anticapitalistas y de cierta ansiedad ambientalista, y una visión más reformista centrada en una mayor presión tributaria sobre sectores de mayores recursos y productores de hidrocarburos. En abril de 2023 se produjo una crisis política y un cambio en el gabinete.

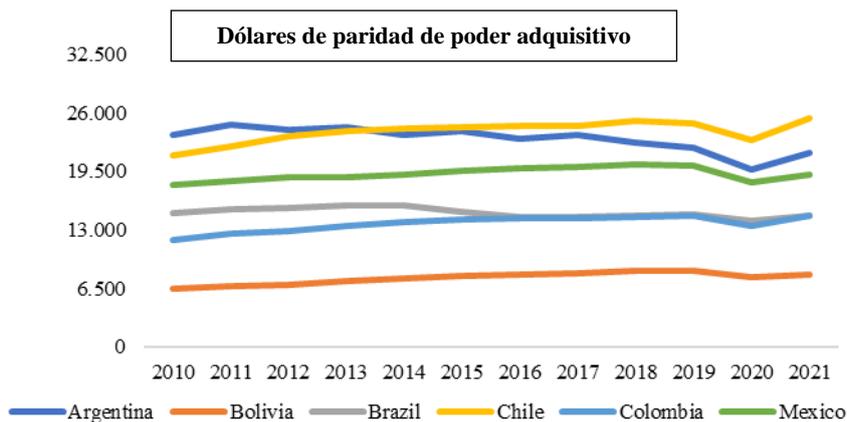
- México. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su gobierno en diciembre de 2018. Su planteo discursivo estuvo fuertemente centrado en la lucha contra la corrupción y la mejora de los servicios sociales gubernamentales. Los pilares de funcionamiento macroeconómico y pro-

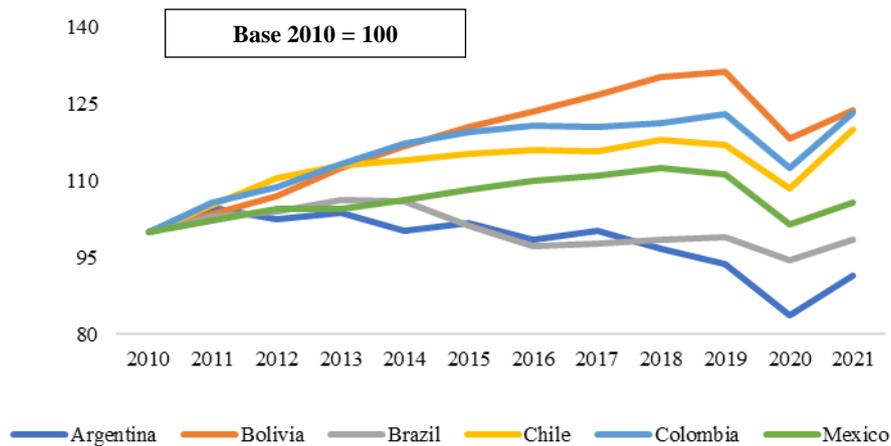
ductivo no sufrieron transformaciones relevantes. Ciertas acciones de gobierno permiten al presidente gozar de una importante popularidad.

El contexto económico: el desempeño de la última década

El desempeño de los países seleccionados fue dispar durante la última década. Mientras Brasil y Argentina mostraron una caída del PIB per cápita, Bolivia y Colombia crecieron por encima de la media mundial, al tiempo que Chile y México fueron casos intermedios (véase Gráfico 1 y Cuadro 1). Los países más grandes y diversificados muestran un peor desempeño que los países más pequeños e intermedios.

GRÁFICO 1. Evolución del PIB por habitante en los países seleccionados en dólares de paridad de poder adquisitivo constantes a precios de 2017 y base 2010 = 100





Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Bolivia ha sido el país de mejor desempeño en la región, pero partiendo de un nivel muy bajo: continúa siendo uno de los países más pobres de América del Sur. Colombia se consolidó como país de ingresos medios, alcanzando incluso el nivel de Brasil. México tuvo un lento pero sostenido crecimiento, situación que se

complicó en los últimos años. Argentina era en 2010 el país de mayor PIB per cápita de este subconjunto, pero perdió tal condición a manos de Chile, el cual dejó de tener el dinamismo de tiempos pasados, pero sin perder el crecimiento.

CUADRO 1. Tasa de crecimiento promedio anual acumulativa 2010-2021 del PIB por habitante en los países seleccionados y el promedio mundial (dólares de paridad de poder adquisitivo constantes a precios de 2017)

	Tasa de crecimiento promedio anual 2010-2021
Argentina	-0,80%
Bolivia	1,97%
Brasil	-0,14%
Chile	1,66%
Colombia	1,91%
México	0,52%
Mundo	1,87%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

3. Un balance sobre avances, limitaciones y resultados

Gestión macroeconómica y agenda de reformas

Algunos gobiernos encararon proyectos de reforma tributaria con el afán de mejorar la progresividad y financiar desbalances fiscales o nuevas políticas públicas. Ello se vio en los casos de Argentina, Chile y Colombia, aunque en el segundo de ellos la reforma no pudo ser implementada debido al rechazo que tuvo en el Parlamento.

En el caso de Argentina, significó la reversión de la reforma implementada por el gobierno de centroderecha de Mauricio Macri en 2017, la cual reducía alícuotas del impuesto a las ganancias y eliminaba gradualmente el impuesto sobre los bienes personales.

En otros términos, la reforma de Macri reducía sustancialmente la presión tributaria sobre algunos sectores de mayores recursos y sobre las empresas. Por otra parte, el Congreso sancionó en 2020 un impuesto por única vez sobre grandes fortunas con el fin de financiar gastos asociados a la pandemia (salud y apoyo económico a empresas afectadas) así como al financiamiento de obras de infraestructura energética, el cual permitió obtener una recaudación equivalente al 0,53% del PIB⁴.

En Chile también se intentó sancionar un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, pero la iniciativa quedó trunca en el

Congreso. La iniciativa buscaba recaudar el equivalente al 3,6% del PIB a partir de una mayor carga sobre los patrimonios que superen los 4,9 millones de dólares para los residentes o domiciliados en Chile (*El País*, 2023). Ello generó una fuerte oposición política y empresaria señalándose como argumento la posible afectación negativa sobre el ahorro y la inversión. En una primera instancia, el proyecto pretendía recaudar el 4,1% del PIB, pero tras meses de negociación, la meta se redujo al 3,6%. La derrota parlamentaria significó un golpe importante para el gobierno.

En el caso de Colombia, la reforma tributaria estuvo centrada en una mayor carga sobre el sector petrolero. Por una parte, se estableció la no deducibilidad de las regalías de la base imponible para calcular el impuesto a las rentas en las empresas petroleras. De acuerdo con el gobierno, esto implica un aumento del 2% al 5% en el impuesto, pero según otras fuentes la presión fiscal aumentó un 17,7% (*El País*, 2022). Asimismo, creó una sobretasa al 35% del impuesto de renta. En el caso de las empresas petroleras, ese extra varía en función del precio del hidrocarburo, pudiendo alcanzar una alícuota del 50%. Otro aspecto de la reforma estuvo relacionado con la salud: se aumentó la imposición sobre bebidas azucaradas y alimentos con agregados de azúcar, sal o grasas. Un aspecto interesante es que la reforma tributaria colombiana estuvo destinada a dar cumplimiento a la regla fiscal, pero sin recurrir a recortes de gastos o limitar la expansión del gasto social. La reforma permitiría adicionar a la recaudación el equivalente al 1,8% del PIB, revirtiendo la baja presión tributaria existente en Co-

⁴ Estimación propia en base a datos de Ministerio de Economía, 2021 y del anuario de estadísticas tributarias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

lombia, en torno al 13% del PIB, que se ubica entre las más bajas de América Latina (Hylton y Tauss, 2023).

Por su parte, México y Bolivia no tuvieron cambios significativos en materia tributaria. En Bolivia se implementó un impuesto a las grandes fortunas al comienzo del gobierno de Arce, fundamentalmente para compensar pérdidas por la COVID-19, que quedó como impuesto permanente. Sus efectos han sido muy limitados debido a diferentes mecanismos de elusión por cambio de residencia y el método de cálculo del impuesto. La recaudación fue muy pobre: solo el 0,068% del PIB⁵. De acuerdo con algunos analistas, fomentó la fuga de capitales generando problemas macroeconómicos que hacía tiempo que el país no experimentaba (*Los Tiempos*, 2022). Después de largos períodos de crecimiento, la situación macroeconómica comenzó a complicarse, en cierta medida por la caída de la producción de gas, lo cual repercutió negativamente sobre las reservas internacionales. El sistema tributario continúa mostrando importantes rasgos de regresividad y, en tal sentido, la izquierda boliviana se ha manifestado en oposición a intensificar la presión impositiva a las rentas a las personas. El MAS aglutina sectores que operan en la informalidad económica y, por ende, un impuesto a la renta iría, en parte, en detrimento de su propia base social⁶.

En Brasil se han planteado dos agendas prioritarias. La primera es el nuevo régimen fiscal destinado a sustituir la reforma

de Michel Temer, que en su momento había establecido un congelamiento del gasto social por 25 años, reforma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. La segunda es la reforma impositiva, uno de los grandes desafíos que tiene el sistema económico brasileño, ya que ningún gobierno pudo avanzar en esta dirección en el Congreso en los últimos 25 años. Brasil tiene un sistema impositivo muy complejo, que tiene su origen en la década de 1960. Si bien hubo reformas parciales, persiste un enjambre de alícuotas y tasas diferenciales para los cuales se propone una simplificación. Esta reforma es de muy difícil concreción porque requiere acuerdos con los diferentes poderes subnacionales.

En el caso de México, se observaron rasgos de continuidad en las políticas macroeconómicas, intensificándose el proceso de austeridad fiscal, incluso durante la pandemia, frente a la cual el gobierno aportó los apoyos fiscales al sistema productivo y la población en general más bajos de toda la región y las economías emergentes (Moreno Brid y Sánchez, 2022). AMLO es uno de los líderes con mayor apoyo en el ámbito regional y ello ha estado sustentado en su particular estilo de acción y comunicación política, y en ciertas reformas en el ámbito laboral que, junto a políticas sociales de transferencias de ingresos, le permitieron obtener un importante apoyo entre los sectores de menores recursos. Ackerman (2023) enfatiza estos aspectos, señalando que su proyecto ha sido “alejarse del neoliberalismo hacia un modelo de capitalismo nacionalista-desarrollista”. Sin embargo, con las excepciones señaladas, a lo cual se debe adicionar el cambio de política respecto a

⁵ Estimado en base a cálculos oficiales (DW, 2020).

⁶ Análisis de Fernando Molina, en comunicación con el autor.



la petrolera estatal PEMEX, las políticas macroeconómicas no han tenido cambios significativos: no hay modificaciones en el esquema de integración con Estados Unidos ni en la política industrial ni tributaria. El incremento en la recaudación ha estado más asociado a mejoras administrativas que a reformas más integrales y progresivas. Asimismo, se suelen enfatizar algunos proyectos de infraestructura pública, como el denominado Tren Maya, pero la inversión pública total no detuvo su ritmo descendente y llegó en 2022 al 2,3% del PIB, el menor registro en décadas (Moreno Brid, 2023).

Más allá de los matices señalados, es imposible escindir estos avances y resultados de la situación general que se vivió en estos años, caracterizada por el impacto de la pandemia, el crecimiento de la inflación, en particular tras el estallido de la guerra en Ucrania, y un escenario general de mayor complejidad. En el caso de Argentina, esto se agrava por una situación de desequilibrio macroeconómico de arrastre que lleva más de una década, con una inflación en alza que la diferencia de los otros casos, y sobre la cual los diferentes gobiernos no han acertado en la receta para su reversión. En Brasil, el bajo crecimiento demanda cambios para volver a poner en marcha los motores de la economía, más allá de que los indicadores macroeconómicos generales no muestran desequilibrios. El caso de Chile refleja las dificultades para encontrar un sendero alternativo respecto al esquema de crecimiento de las últimas décadas, que mostró éxitos en materia de reducción de la pobreza, pero limitaciones en términos distributivos. El resultado del primer año de gobierno y el fracaso de la reforma cons-

titucional pusieron al descubierto las contradicciones existentes en la sociedad chilena, dispuesta a avanzar un paso más en las reformas, pero muchos pasos menos de lo que algunos dirigentes supusieron.

En Colombia aparecen reflejadas las tensiones de un gobierno que se ubica a la izquierda del espectro político con agendas muy radicales, como la ambiental, y las necesidades de corto y mediano plazo, donde la descarbonización inmediata no es una opción posible. Finalmente, Bolivia afronta desafíos inéditos para el MAS debido a complicaciones macroeconómicas que no había tenido en el pasado y dificultades para poder resolverlas en el corto plazo, tema que será retomado al abordar la cuestión de los recursos hidrocarbúricos.

En definitiva, este breve *racconto* muestra matices y diferencias relevantes en el abordaje de los aspectos macroeconómicos, así como limitantes de índole política para avanzar en reformas de mayor progresividad.

El escenario geopolítico y los nuevos desafíos productivos

México ha sido el principal beneficiario regional de las estrategias de *reshoring* y *nearshoring* impulsadas por Estados Unidos con el objetivo de revertir el avance productivo y tecnológico mundial de China, gozando de ventajas particulares previamente desarrolladas (Garrido, 2022). Uno de los sectores beneficiados ha sido la cadena automotriz. En particular, la producción de autopartes aumentó un 12,7% en 2022, alcanzando un récord histórico (T21, 2022). Se observa mayor



competencia por terrenos, inmuebles y búsqueda de personal en ciudades del norte como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, donde empresas como Mattel, Hasbro o Tesla anunciaron planes de inversión, indicando la próxima radicación de nuevas inversiones.

En Brasil, este tema está presente en el abordaje del sector público y el sector privado. En las tres propuestas de política industrial (empresarial, sindicatos y el propio gobierno del PT) la cuestión del *reshoring* se limita a propuestas por el momento sin demasiado detalle. Brasil continúa apostando a un relacionamiento global más diversificado, jugando un papel particular el espacio de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica).

Bolivia, por su parte, tiene un gobierno que se alineó dentro de la órbita política de China y Rusia. Parte de los planes industriales vienen apuntalados por acuerdos con China, en particular la construcción de dos plantas de refinación de zinc. En la misma dirección se apunta un acuerdo de concesión de litio a un consorcio inversor chino.

Argentina ha mantenido relaciones internacionales diversificadas. Por una parte, ha fortalecido su relación con China expresada en financiamiento para obras de infraestructura (parques solares y represas hidroeléctricas) con ingresos de inversiones en litio y acuerdos financieros (*swap* de monedas entre bancos centrales que le permitió al gobierno argentino acceder a financiamiento). Por otra, ha fortalecido relaciones con Estados Unidos, destinadas a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También

existe presencia de una empresa estadounidense en la producción de litio, la cual ha expandido sus inversiones.

Chile tampoco ha manifestado preferencias geopolíticas. Sus buenas relaciones con Estados Unidos no han impedido el ingreso a la iniciativa de la Ruta de la Seda, al tiempo que capitales chinos son propietarios de parte del capital de SQM, uno de los principales proyectos de litio del país.

En términos generales, se observa una evolución todavía ambigua respecto a estos cambios tendenciales. México avanza en su integración con Estados Unidos; Chile y Argentina procuran una relación con ambas potencias. Chile tiene una balanza equilibrada con China, a diferencia de Argentina, la cual se explica por las exportaciones mineras. En los próximos años el desequilibrio que muestra argentina podría revertirse por el avance de inversiones y exportaciones mineras, y tal vez energéticas.

La relación y articulación entre Estado y mercado

Bolivia tuvo su etapa de nacionalizaciones en los comienzos del ciclo político del MAS con el ascenso de Evo Morales a la presidencia. El gobierno de Arce ha avanzado en la creación de algunas empresas estatales y desde allí orienta sus planes de industrialización, a los cuales suma acuerdos con empresas chinas para el desarrollo de industrias químicas y mineras. En este sentido, Arce le ha puesto una mayor carga técnica, en tanto los planes de creación de empresas estatales en el período de Evo Morales se realizaban en función de demandas sociales. El go-



bierno de Bolivia ha mantenido rispideces con el sector privado que dificultaron la implementación de programas de fomento de la inversión, sin que tampoco se observen aún intervenciones públicas decisivas para ampliar la matriz productiva. En la agricultura muchos productores han solicitado permisos para usar transgénicos, pero el gobierno los prohíbe, aunque existe de hecho una producción informal con dichos paquetes tecnológicos, pero por fuera del marco legal. Persisten las tensiones con el sector privado y un modelo muy confiado en las capacidades estatales y poco proclive a promover acuerdos con sectores empresariales.

En Brasil se ha consolidado en las últimas dos décadas la crisis del Estado desarrollista y el avance de una dinámica centrada en el mercado. Incluso con el PT en el gobierno no se produjo una reconfiguración significativa de las relaciones Estado-mercado. Es cierto que en los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff se asistió a las grandes empresas de ingeniería asociadas a la obra pública, las industrias de la defensa y astilleros, pero se trató antes bien de casos aislados. El ascendente sector del agronegocio tuvo una relación conflictiva con el PT por la imposición de barreras ambientales y límites en el uso de agroquímicos. Por su parte, los bancos privados han expresado su malestar por la expansión de los bancos públicos, en particular del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDS). La apuesta que dichos sectores hicieron en su momento por Temer, en primera instancia, y Bolsonaro a continuación, no les resultó efectiva e incluso una parte del sector privado se mostró activamente proclive al regreso de Lula a

la presidencia. En la actualidad, la relación Estado-mercado es conflictiva y Lula dio al vicepresidente Geraldo Alckim un papel importante como nexo entre ambos. Persiste cierta desconfianza y temor del agronegocio con regulaciones ambientales y controles sanitarios, al tiempo que el sector financiero quiere al BNDS fuera del mercado de capitales y del mercado accionario, y el sector industrial tiene esperanza en la reindustrialización después del magro interés que el gobierno de Bolsonaro mostrara hacia el sector.

En Chile, parte de las disputas para la reconfiguración de las relaciones Estado-mercado se expresaron en dos sistemas de provisión de bienes públicos: salud y pensiones. El sistema de salud se basa en un seguro privado que aumenta mes a mes de manera arbitraria. Si bien hubo muchas demandas judiciales, la situación no se ha revertido y se debate una reforma integral. También se discute una reforma del sistema de pensiones, pero dado que el oficialismo no cuenta con la mayoría congresal, no se podrá implementar una reforma estructural. Se espera que la iniciativa no cuestione el sistema de capitalización, sino que establezca una nueva distribución de las cargas entre empleados y empleadores, aumentándola sobre estos últimos.

En Colombia, se produjo una importante crisis política asociada a la controversial reforma del sistema de salud. El proyecto apuntaba a reemplazar el sistema de salud basado en prestadores privados y públicos por un sistema completamente público. Dicha reforma no solo fue rechazada, sino que condujo a una crisis de gabinete donde no solo renunció la ministra del área,

sino también varios ministros que no pertenecían al partido del presidente Petro.

En Argentina, las tensiones Estado-mercado se expresaron en las relaciones con el sector agroindustrial, comenzando con una mayor imposición al sector (aumento de las alícuotas de derechos de exportación a la cadena de la soja de hasta un 33%), sumado a algunas intervenciones en el sector de carne bovina. El gobierno no tuvo política de nacionalizaciones, pero sí dos experiencias con resultados diferentes. El primero fue la intervención ante el defalco de la agroexportadora Vicentín, con un planteo de estatización que generó un fuerte rechazo sectorial y político y terminó con un paso atrás por parte del gobierno. El segundo fue la estatización de la empresa metalúrgica y de tecnología IMPSA, que atravesaba una larga crisis financiera que la puso al borde del cierre definitivo. En este caso, la intervención fue más ordenada y políticamente consensuada, pudiéndose lograr el salvataje de la empresa. El sector industrial ha manifestado un apoyo tibio al gobierno, con excepción de las grandes compañías de mayor peso que se mostraron mucho más distantes. El peronismo ha tenido dificultades para enhebrar acuerdos duraderos con los sectores empresarios, conservando el fuerte respaldo del sindicalismo.

La gestión de los recursos naturales

En Bolivia se avizoran nuevas dificultades debido a limitaciones en la planificación de largo plazo en su producción de gas, apreciándose el agotamiento de yacimientos y el inicio de una fase de declino (*La Razón*, 2023). En la actualidad, el gobierno está abocado a convocar a

empresas privadas a invertir y revertir el problema ya que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no cuenta con los recursos suficientes para financiar estas inversiones.

En Brasil, el gobierno de Lula busca fortalecer a Petrobras tras un período de desinversión (el gobierno de Bolsonaro había vendido refinerías y estaciones de servicio). En 2021, se descubrió una gran reserva en la costa brasileña en la desembocadura del río Amazonas, 150 kilómetros mar adentro, que ingresó en la fase de exploración, pero el propio Ministerio de Medio Ambiente le niega el pedido a Petrobras, a pesar de las solicitudes de los gobernadores. Se está apuntalando también la energía solar y eólica, y es clave para Brasil la energía basada en biomasa, montada en un programa de etanol. Hay estudios para producir más biomasa, pasta de celulosa a partir de una variedad de eucaliptos, una nueva caña de azúcar que produce poca cantidad de azúcar y más biomasa para producir energía.

En Colombia, se han producido tensiones importantes debido a la posición antihidrocarburos expresada por el partido de Petro y algunas opiniones del propio presidente. En tal sentido, el planteo del primer ministro de Hacienda de Petro, José Antonio Ocampo, ha sido encarar el proceso como una transición, gravando más la renta hidrocarburífera, pero con la convicción de que no es posible frenar la exploración de petróleo y gas. Las tensiones siguen estando presentes.

Argentina dio impulso a la producción energética y minera. En el primer caso, destaca la promoción de inversión en la

reserva de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en particular con el plan de estímulo a la producción de gas, el cual, sumado a la construcción de un nuevo gasoducto, está permitiendo alcanzar el autoabastecimiento energético, fase previa al inicio de una posible etapa exportadora de gas natural licuado. En la minería destacaron las inversiones en litio y el inicio de nuevas inversiones en cobre, todavía desde un lugar secundario. En ambos casos, la política industrial procuró el desarrollo de proveedores locales industriales y de servicios.

En México, AMLO dispuso la nacionalización del litio, pero con algunos signos de interrogación respecto a los efectos prácticos de dicha medida, ya que las reservas de dicho mineral no despiertan tanto interés debido a los mayores costos de explotación. El interés mundial por el litio está fuertemente orientado hacia el denominado “triángulo del litio”, ubicado en regiones de tres de los países bajo análisis: Bolivia, Chile y Argentina. Es interesante notar diferentes abordajes. En el caso de Bolivia se priorizó una gobernanza centrada en el manejo estatal, hasta ahora sin resultados, ya que el país no ha logrado iniciar su producción en escala. Chile se ha consolidado como un importante productor mundial y los cambios en los contratos le permitieron acrecentar la apropiación de una mayor parte de la renta litera en 2022, año de fuerte alza del precio de dicho producto. Argentina es el país que, en perspectiva, despierta mayor interés inversor, con un esquema descentralizado (de acuerdo con su Constitución Nacional, los recursos naturales son propiedad de las provincias), y en la actualidad tiene tres proyectos en funcionamien-

to, cinco en construcción y cerca de 30 en etapas de pre-factibilidad, factibilidad o exploración avanzada. En 2022, el 47% de la producción mundial de litio provino de Australia, el 30% de Chile, el 15% de China y el 5% de Argentina.

La ampliación de la matriz productiva

En Bolivia se ha destacado un ambicioso plan de Arce para la industrialización en la industria de la química básica. Dicho plan parte de la creación de la empresa pública Industria Boliviana Química, e incluye la instalación de cuatro plantas en Potosí, en una extensión de 120 hectáreas para la producción de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, carbonato de sodio, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio y cloruro de calcio. Es un plan ambicioso pero razonable en términos del aprovechamiento de potencialidades basadas en los recursos naturales y el desarrollo de nuevas capacidades. Cabe destacar que algunos de estos productos son insumos cruciales para la producción de litio. Las dudas están puestas sobre las posibilidades para financiar el programa, que incluye la importación de cerca de 30 plantas industriales (SEPREC, 2023)⁷.

En Brasil, existe cierto entusiasmo para retomar un sendero de la industrialización, pero persisten dudas en lo que representa pasar del discurso a las acciones estratégicas. Medicamentos e industrias

⁷ Ver datos de SEPREC, disponibles en <https://www.seprec.gob.bo/index.php/2023/04/26/bolivia-avanza-hacia-la-industrializacion-con-la-creacion-de-la-empresa-publica-industria-boliviana-quimica/>; nota del viceministerio de Comunicación, disponible en: <https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20230426/34540>, y comunicado de Unicom-MDPyEP, disponible en: <https://produccion.gob.bo/?p=19379>

de la defensa son dos sectores con acciones estratégicas y en los que, en su momento, Lula hizo esfuerzos importantes. La energía renovable, biomasa y la electrificación del transporte público son áreas con chance de prosperar en el actual mandato presidencial.

En Chile, el gobierno de Boric ha mostrado cierta recuperación en la vocación industrial y de ampliación de la matriz productiva. No obstante, las diferencias internas demoraron la instalación de la nueva visión sobre la política industrial. De manera reciente se presentó la estrategia para el litio. En el Salar de Atacama se busca negociar una extensión de contrato a cambio de mayor participación del Estado en la gestión (51% a través de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo). Con los salares más pequeños, las propuestas deben tener participación mayoritaria del Estado. El hidrógeno verde todavía está en desarrollo (se recibieron propuestas de inversión, pero todavía se encuentran bajo análisis). Con respecto a otros sectores el avance ha sido lento. Se planteó un proyecto de conformación de una banca de desarrollo y ampliación de créditos de la Corfo.

En Colombia, se ha observado un regreso a la política productiva con vocación de reindustrialización. Se produjo la reorganización del sistema de banca de desarrollo estableciendo cuatro grandes prioridades. Entre ellas, la que ha tomado impulso es la de la inclusión crediticia para microempresas; las otras estaban en fase de formulación, en particular la atinente a fomento de la innovación.

En Argentina, las políticas de ampliación de la matriz productiva se orientaron a: fomentar el desarrollo energético y minero y sus proveedores con fines exportadores; la reactivación de las industrias manufactureras, con 150 medidas de política productiva, incluyendo programas de crédito subsidiado, desarrollo de proveedores y programas sectoriales; el apoyo a los servicios basados en conocimiento y la generación de proyectos para promover nuevos sectores, destacando electromovilidad, cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, hidrógeno verde y biotecnología; y cambios en la legislación de compras públicas (Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, 2021c). Los avances de las iniciativas mencionadas fueron disímiles debido a las desavenencias internas dentro de la coalición de gobierno, en tanto algunas obtuvieron apoyo parlamentario y pudieron ser ejecutadas, y otras no fueron tratadas. Al mismo tiempo, la crisis macroeconómica iniciada en la segunda mitad de 2022 ralentizó la ejecución de muchos de estos programas.

El abordaje de las nuevas agendas: ambiente, género e igualdad

En materia ambiental, Bolivia muestra dificultades debido a la fuerte presencia de actividades informales muy contaminantes, entre las que cabe mencionar a la minería ilegal de oro, un tipo de minería de supervivencia que tiene vinculaciones con las bases sociales del MAS. Este tipo de producción está generando daños en el norte de La Paz, utilizando mercurio que luego es desechado en el río.

En el caso de Brasil, el tema ambiental es crítico para el gobierno de Lula. Muchos

sectores apuestan a borrar la imagen mundial negativa que dejó Bolsonaro, destacándose el empeño de la diplomacia y del congreso por enfatizar el histórico papel de Brasil en defensa del medio ambiente. La defensa de la Amazonía está presente en todos los discursos, y se propuso a Belén como sede de COP25, pero hay contradicciones como el ya mencionado tema del petróleo.

En Chile se hicieron declaraciones de defensa del mar, muy generales, sin mucha innovación y, con respecto al litio, se propugnó la defensa de zonas protegidas. En Colombia, la estrategia de cambio climático se ha asentado en algunas acciones con apoyo tributario. El tema central es el freno a la deforestación en la selva amazónica y se han comenzado a ejecutar acciones.

Finalmente, en Argentina la cuestión ambiental se estructuró en el lanzamiento de una agenda de desarrollo productivo verde, basada en el desarrollo de nuevas actividades como el hidrógeno verde, donde cabe destacar acciones de investigación y desarrollo, y nuevas inversiones privadas, sumado al fomento de la electromovilidad y la economía circular. Con respecto a la cuestionada actividad minera, se lanzó una iniciativa de diálogo social y comunitario (la Mesa sobre Minería Abierta a la Comunidad, MEMAC) y un sistema de información minero abierto (SIACAM)⁸.

⁸ Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/siacam>; <https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/memac>

En cuanto a las agendas de igualdad, en el caso de Bolivia y Brasil aparecen más asociadas al indigenismo y al racismo que al género. En Chile, se impulsaron acciones para incorporar a mujeres en las juntas directivas de las empresas, y en Argentina se implementaron acciones para mejorar la llegada de mujeres a puestos decisivos y fomentar su presencia en actividades económicas históricamente masculinizadas⁹, además de programas fiscales de fomento (reducción de aportes empresarios a la seguridad social a quienes incorporen mujeres y diversidades).

4. Reflexiones finales

El primer punto por señalar en esta sección alude a las dificultades que han encontrado las diferentes expresiones políticas analizadas para enhebrar e implementar una estrategia económica transformadora, coherente y articulada. Ello parece guardar algunas relaciones, aun con sus heterogeneidades, con la polarización política existente, pero también con dificultades de articulación al interior de las diferentes fuerzas políticas, tanto en términos conceptuales como de ejecución de políticas. No parece existir un consenso claro respecto a qué significa ser transformador en materia económica en un sentido progresista, o bien las diferencias tácticas se presentan con mucha asiduidad. Un debate conceptual profundo es una materia pendiente. El problema no parecería ser la ausencia de marcos conceptuales e ideas; la región ha sido muy prolífica al respecto desde hace largas

⁹ Véase “Hacia una visión compartida sobre la perspectiva de género en las políticas de desarrollo productivo”. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hacia_una_vision_compartida_genero_9.11.20.pdf

décadas, sino de articulación política con actores económicos y sociales y de lograr síntesis adecuadas y pragmáticas.

En segundo lugar, se observan importantes dificultades para congeniar acuerdos sociales con sectores productivos y empresarios que permitan articular estrategias de inversión productiva de mayor alcance, con el fin de ampliar o diversificar la matriz productiva. Es un resultado paradójico, por cuanto, en general, las fuerzas de derecha han sido predominantemente liberales en materia económica y excesivamente sesgados hacia la dinámica de mercado; de modo que la articulación estratégica aparece reflejada en un conjunto vacío. La construcción de un nuevo productivismo en el sentido de Rodrik (2022) es una necesidad urgente y las fuerzas progresistas necesitan tomar esa bandera y congeniarla con sus objetivos inclusivos y distributivos. Coexisten visiones estatistas muy restrictivas (como el caso de Bolivia) con otras que aparecen más conectadas con rasgos de continuidad con el neoliberalismo, de modo que la construcción de ese *mix* entre Estado y mercado permanece como desafío pendiente, lo cual puede resultar ciertamente frustrante, habida cuenta la existencia de una “marea rosa” a comienzos de este siglo. Vale recordar aquel intento de Bresser Pereira, en el marco de aquel ciclo de gobiernos progresistas, de elaborar una suerte de “neo-desarrollismo”, con un marco conceptual actualizado¹⁰. Una relectura de aquel enfoque, a ya más de una década de su formulación, muestra que ningún país llegó a implementar plenamente algo siquiera similar, más allá de

las objeciones o dudas que pudiera generar dicho esquema conceptual de políticas.

En tercer lugar, se observa la aparición de nuevas tensiones asociadas a la agenda ambiental. Las comprensibles ansiedades de las nuevas militancias ambientalistas chocan con la imperiosa necesidad de ampliar la matriz productiva para generar empleos y desplazar la restricción externa. La construcción de una diagonal de desarrollo productivo verde es también una necesidad imperativa, lo cual requiere no solo articulación política, sino también diálogo político y social. La gran paradoja es que la transición demanda ingentes recursos para financiar nuevos métodos productivos y nuevas industrias verdes, de los que la región carece, de modo que recurrir a prácticas prohibicionistas solo podrá producir mayores restricciones financieras. Hay mucho por hacer y también eso requiere desarrollar una agenda conceptual propia, acorde a las necesidades y posibilidades de la región y con un eje estratégico de política industrial.

En cuarto lugar, las reformas macroeconómicas han mostrado diferentes estadios y complejidades de implementación, tensiones sociales y nuevos desafíos para ampliar la base de sustentación política que viabilice su implementación, más aún en una región caracterizada por la desigualdad, la cual, en algunos casos, adquiere dimensiones escandalosas a pesar de la tendencia descendente de las últimas décadas. Aspectos como una tributación más progresiva, mayor eficacia del gasto, financiamiento equilibrado de gasto social con inversión pública y políticas de fomento productivo, sumado a políticas

¹⁰ Al respecto véase Bresser-Pereira y Gala (2010).

macroeconómicas contracíclicas, son elementos que no aparecen del todo articulados en las experiencias analizadas, o bien mostraron limitaciones a la hora de su implementación práctica.

En quinto lugar, la gestión de los recursos naturales requiere una mayor articulación con estrategias de desarrollo de proveedores locales y regionales, y aprovechar su producción como palanca para el desarrollo industrial y tecnológico. Ello implica el desarrollo tanto aguas arriba como aguas abajo. A modo de ejemplo, en Kulfas (2017) presento evidencia del desaprovechamiento del ciclo de auge de *commodities* para desarrollar industrias de proveedores. Así, entre 2003 y 2014, la producción latinoamericana de petróleo y gas aumentó un 22% y se benefició de elevados precios que triplicaron el valor de las exportaciones, pero las industrias proveedoras más que duplicaron su déficit comercial, pasando de 10.000 a 22.000 millones de dólares. En otras palabras, no se aprovechó el auge para estimular el desarrollo de las industrias proveedoras. Asimismo, en el caso de recursos no renovables, la articulación entre el sector público y el capital privado es un tema pendiente. Algunos países han avanzado en esta dirección, destacando el caso de Chile con el litio. Bolivia ha nacionalizado el gas, lo cual le trajo beneficios en términos de apropiación de la renta del recurso, pero limitó la inversión a largo plazo, tema que está comenzando a pagar en este momento. Está claro que la mejor opción en términos de apropiación de la renta es el desarrollo basado en iniciativas públicas, pero ello no suele ser suficiente, siendo la segunda mejor opción una adecuada articulación entre iniciativas públi-

cas e inversión privada, nacional e internacional. La peor opción es el declino productivo por falta de inversión o, como le ocurrió a Argentina, la necesidad de importar hidrocarburos a pesar de contar con reservas, aspecto que recién en el último trienio comenzó a resolverse.

En sexto lugar cabe destacar la cuestión geopolítica. Los momentos de tensiones son también oportunidades para negociar mejores opciones para el desarrollo del comercio e inversiones con mayor valor agregado y tecnología. Chile y Argentina firmaron su ingreso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta con China, sin que ello los haya llevado a enemistarse con Estados Unidos. El interés de estos países en el litio puede ser también una llave para promover inversiones en electromovilidad. La agresión rusa a Ucrania también puede significar una oportunidad para proveer gas natural licuado a Europa y convertir a Brasil y Argentina en proveedores confiables y de largo plazo a dicho continente, teniendo en cuenta el papel que ocupará el gas como combustible de transición. Las iniciativas de hidrógeno verde podrán ocupar un papel muy relevante en Chile, Brasil, Colombia y Argentina.

En séptimo lugar, el escenario internacional es propicio para una mayor integración regional. La reconfiguración de las cadenas globales de valor en segmentos más cortos y priorizando la seguridad de suministros abre nuevos escenarios para el desarrollo industrial. El auge de la economía del conocimiento propicia nuevos esquemas de integración. La agenda verde y el posible auge de la movilidad sostenible abre opciones para el desarrollo

industrial y tecnológico en los países de la región. Nada de ello ocurrirá de manera espontánea; requiere políticas públicas, vínculos entre gobiernos, sector privado y sociedad civil. Es una nueva oportunidad para el Mercosur y para su ampliación.

En definitiva, la región afronta desafíos económicos y productivos muy importantes, en un mundo inestable pero que ofrece nuevas oportunidades. Resulta crucial que las fuerzas políticas de corte progresista puedan articular una nueva síntesis neo-desarrollista, alejada tanto de la prédica neoliberal como de algunos proyectos excesivamente estatistas que han mostrado la carencia de musculatura para

dinamizar la inversión destinada al cambio estructural. La conjunción entre una macroeconomía estable, con políticas fiscales contracíclicas, reformas tributarias progresivas y que promuevan la inversión privada, junto a estrategias de desarrollo productivo y tecnológico que incorporen las nuevas agendas, resulta crucial para la implementación de esa nueva síntesis.

Conclusiones

- Las experiencias reseñadas muestran diferentes tipos de abordaje en materia de política económica y productiva, y la persistencia de enfoques híbridos, con dificultades para la implementación de algunas agendas de reformas.
- Los gobiernos progresistas han tenido dificultades para proponer e implementar un marco coherente y articulado de políticas prudentemente alejadas tanto del neoliberalismo como de proyectos estatistas. Ese enfoque, al que se suele definir como neodesarrollista, ha estado ausente más allá de algunos programas o políticas puntuales.
- La gestión de los recursos naturales es un eje estratégico que necesita dos tipos de abordaje de política pública sobre los cuales se han realizado esfuerzos, pero que deberán ser reforzados. El primero tiene que ver con el desarrollo de las cadenas productivas, tanto de proveedores como de agregación de valor en la cadena. El segundo tiene que ver con la cuestión ambiental y el desarrollo de una agenda productiva verde prudentemente alejada tanto del prohibicionismo como del descuido de las consecuencias ambientales de las diferentes prácticas productivas.
- Las tensiones geopolíticas y los cambios en el escenario productivo mundial tras la pandemia de COVID-19 abren nuevas oportunidades para países de la región, tanto como proveedor de materias primas, energía y minerales para la transición energética, así como de producciones industriales y servicios basados en el conocimiento. Un relacionamiento inteligente, sin alineamientos espurios, se presenta como la opción más sensata para mejorar la inserción internacional con mayor contenido industrial y tecnológico.

Referencias bibliográficas

- ACKERMAN, E. (2023): “El proyecto AMLO”, *New Left Review*.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. y GALA, P. (2010): “Macroeconomía estructuralista del desarrollo”, *Revista de economía política*.
- CEPAL (2014): *Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo*, Santiago de Chile.
- CORDEN, W. M. (1984): Booming sector and Dutch disease economic: survey and consolidation, *Oxford Economic Papers*, vol. 36, nº 3.
- DW (2020): “Bolivia instauro impuesto a los 152 más ricos”, 29 de diciembre.
- EL PAÍS (2022): “Las cinco claves de la reforma tributaria de Petro”, 4 de noviembre. Disponible en: <https://elpais.com/america-colombia/2022-11-04/las-cinco-claves-de-la-reforma-tributaria-de-petro.html>.
- (2023): “El Congreso chileno da un fuerte golpe a Boric con el rechazo de su reforma tributaria”, 8 de marzo. Disponible en: <https://elpais.com/chile/2023-03-08/la-camara-de-diputados-de-chile-rechaza-la-reforma-tributaria-de-boric.html>.
- GARRIDO, C. (2022): “México en la fábrica de América del Norte y el nearshoring”, CEPAL, Naciones Unidas, México.
- HYLTON, F. y TAUSS. A. (2023): “Colombia en tiempos de Petro. Expectativas de cambio y riesgo de “empate catastrófico”, *Nueva Sociedad* nº 305, mayo-junio.
- KULFAS, M. (2017): “Desarrollo y reconfiguración productiva en América Latina entre la transnacionalización productiva y el auge de los commodities. Del viejo ideario desarrollista a una búsqueda inconclusa”, Tesis doctoral. FLACSO, Buenos Aires.
- LA RAZÓN (2023): “YPFB reconoce que pozos maduros comienzan a declinar su producción; busca nuevas áreas”, 30 de abril.
- LOS TIEMPOS (2022): “En 2 años El impuesto a las fortunas recauda poco y provoca fuga de capitales”, 3 de mayo. Disponible en: <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/2-anos-impuesto-fortunas-recauda-poco-provoca-fuga-capitales>.
- MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE ARGENTINA (2020a): “Hacia una visión compartida sobre la perspectiva de género en las políticas de desarrollo productivo”. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hacia_una_vision_compartida_genero_9.11.20.pdf

- (2020b): “El desarrollo productivo en la Argentina pospandemia. Hacia una visión compartida sobre el desarrollo económico de largo plazo y el cambio estructural”. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hacia_una_mirada_compartida_del_desarrollo_productivo_1_1.pdf.
- (2021a): “Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0.” Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_de_desarrollo_productivo_argentina_4.0.vf__2.pdf.
- (2021b): “Plan de Desarrollo Productivo Verde”. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_desarrollo_productivo_verde.pdf
- (2021c): “Estrategias y acciones para el desarrollo productivo 2020-2023”. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/estrategia_para_el_desarrollo_productivo_-_2020-2023_0.pdf
- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE COLOMBIA (2022): “Elementos de debate sobre los efectos del proyecto de ley de reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”, Bogotá.
- MOLINA, F. (2018): “De milagros y talones de Aquiles. La situación del modelo económico boliviano”, *Nueva Sociedad*, junio.
- (2022): “Bolivia, el país con menos inflación del mundo”, *Nueva Sociedad*.
- MORENO BRID, J. C. (2023): “Hoy, a más de cuatro largos años ‘haciendo historia’ ¿cómo vamos?”, Presentación en el Seminario de la Economía de México, ITAM.
- MORENO BRID, J. C. y SÁNCHEZ, J. (2022): “Giros en la agenda de desarrollo de México 1950-2020: luces y sombras”, inédito, México.
- OCAMPO, J. A. (2011): “Macroeconomía para el desarrollo: políticas anticíclicas y transformación productiva”, *Revista de la CEPAL* n° 104, Santiago de Chile.
- QUESADA, J. D. (2022): “Para crecer tenemos que trabajar mano a mano con las personas de altos ingresos, con los más ricos”, entrevista a José Antonio Ocampo, *El País*, 9 de julio.
- RAMÍREZ CENDRERO, J. M. y WIRTH, E. (2014): “Empresas públicas, fondos soberanos y enfermedad holandesa: el caso de Noruega. Lecciones para economías subdesarrolladas ricas en recursos naturales”, en A. HIDALGO-CAPITÁN y A. MORENO-MORENO (eds.): *Actas del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo*, Universidad de Huelva.

RED SUR (2014): “¿Subiendo la escalera? Oportunidades, obstáculos y lecciones en torno al escalamiento de las cadenas de recursos naturales en América del Sur”, Montevideo.

RODRIK, D. (2022): “The New Productivism Paradigm?”, *Project Syndicate*, 5 de julio.

SACHS, J. y A. WARNER (2001): “The curse of natural resources”, *European Economic Review* n° 45.

T21 (2022): “Nearshoring y reshoring, retos y oportunidades para el sector de autopartes en México”. Disponible en: www.T21.com.mx.

Fundación Carolina, noviembre 2023

Fundación Carolina
Plaza del Marqués de Salamanca n° 8
4ª planta, 28006 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

https://doi.org/10.33960/AC_15.2023

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)